

MOVIMIENTOS DE OKUPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS: LOS CASOS DE MADRID, BARCELONA Y BILBAO

ROBERT GONZÁLEZ GARCÍA¹ • MERCÈ CORTINA-ORIOI²
THOMAS AGUILERA³

Fecha de recepción: 17 de enero de 2019
Fecha de aceptación: 15 de marzo de 2019

SUMARIO: I. Introducción. II. Metodología. III. Resultados y discusión. IV. Conclusiones. V. Referencias.

Resumen

El objetivo de este artículo es identificar los impactos del movimiento por la okupación en las políticas públicas de España (1984-2018). A través de la hermenéutica de procesos sociales, se comparan tres casos (Madrid, Barcelona y Bilbao). Se analizan datos cuantitativos y cualitativos de las siguientes variables: 1) historia, tipos, número y visibilidad de las okupaciones; 2) cambios en los gobiernos locales y 3) institucionalización.

Se trata de un estudio original: los impactos de los movimientos sociales no suelen aparecer en la producción académica sobre políticas públicas y los expertos en movimientos sociales apenas se han interesado en los efectos específicos de la acción colectiva en las políticas.

- 1 Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universitat Autònoma de Barcelona; profesor-investigador titular, área académica de Ciencias Políticas y Administración Pública, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México; rgonza67@gmail.com / ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6166-5562>.
- 2 Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco; profesora de Políticas Públicas y Política Urbana, De Montfort University, Leicester, Reino Unido; merce.cortina-oriol@dmu.ac.uk
- 3 Doctor en Ciencias Políticas por Sciences Po París; profesor de Ciencia Política, Instituto de Estudios Políticos de Rennes, Arènes, Francia; thomas.aguilera@sciencespo.fr

El resultado de la investigación es que el movimiento okupa incide en los tomadores de decisiones, a través de innovaciones y creatividad, que se materializan en nuevas viviendas, así como políticas culturales, sociales o de juventud. Este fenómeno tiene su raíz en los conflictos urbanos sobre los cuales este colectivo ejerce presión de manera deliberada o indirecta como efecto colateral de una acción disruptiva. Las experiencias de okupación son dispares en las tres ciudades: existen cambios y continuidades durante el periodo estudiado y diversidad en el nivel de institucionalización y en las relaciones movimiento-autoridades.

Palabras clave: okupación; políticas públicas; sociología urbana; movimientos sociales; gobernanza.

Squatting movements and urban public policies: the cases of Madrid, Barcelona, and Bilbao

Abstract

The objective of this article is to identify the impacts of the squatting movement on public policies in Spain (1984-2018). Through the hermeneutics of social processes, three cases are compared (Madrid, Barcelona, and Bilbao). Quantitative and qualitative data of the following variables are analyzed: 1) history, types, number and visibility of squatting 2) changes in local governments and 3) institutionalization. This is an original study: the impacts of

social movements do not usually appear in the academic production of public policies and experts in social movements have rarely been interested in specific effects of collective action on these policies. The result of the research is that the squat movement affects decision-makers, through innovations and creativity, which materialize in new housing, and cultural, social or youth policies. This phenomenon is rooted in urban conflicts over which the squat movement deliberately or indirectly exerts pressure as a collateral effect of a disruptive action. The squatting experiences are different in the three cities: there are changes and continuities during the period studied and diversity in the level of institutionalization and in the relations between movement and authorities.

Keywords: squatting; public policies; urban sociology; social movements; governance.

Introducción

El movimiento okupa centra su actividad en la okupación de inmuebles abandonados, sin el consentimiento del propietario, para darles un uso de vivienda o de centro social y en su legítima defensa (Martínez, 2004). Por tanto, este movimiento no se dedica globalmente a influir sobre las políticas públicas, ya que corresponde más a una crítica radical hacia las instituciones públicas y a una voluntad de desarrollar actividades de manera autónoma, al mar-

gen de las autoridades y como alternativa durable al capitalismo (Cattaneo, & Martínez, 2014). Sin embargo, sin necesariamente quererlo o saberlo, los activistas influyen de forma notoria en la construcción de la ciudad en diferentes niveles: contribuyen a cambiar la concepción de la vivienda, de la sociabilidad local y de la cultura urbana.

La literatura sobre el mundo okupa en Europa es relevante en términos de explicar la historia de estos movimientos (Martínez, 2004; Péchu, 2014), los modos de organización alternativos (Piazza, 2012), los procesos de criminalización (Debelle, Cattaneo, González, Barranco, & Llobet, 2018) y las políticas de represión (Asens, 2004). Los Centros Sociales Okupados Autogestionados (CSOA)⁴ son lugares de resistencia anticapitalista en contra de políticas urbanas agresivas (Mudu, 2013) y sitios de encuentro, organización y vivencia de luchas más globales (Martínez, 2007; González, & Araiza, 2016). Pero existen también okupaciones de vivienda menos activistas, lugares donde se refugian los sin techo, los inmigrantes y todos los pobres urbanos. Las okupaciones de viviendas vacías son alternativas transitorias a la calle (Bouillon, 2009) y al chabolismo (Aguilera, 2018).

Recientemente, los debates se han focalizado en las relaciones entre okupas y autoridades, a través del estudio preciso y comparativo de los procesos de institucionalización-cooptación que han ocurrido en Europa y Estados Unidos (Pruijt, 2003; Domínguez, Martínez, & Lorenzi, 2010; Martínez, 2013).

Otra forma de pensar al movimiento okupa es como plataformas de innovación social (Membretti, 2007) que pueden producir efectos importantes en los espacios urbanos (Cogato, Pattaroni, Piraud, & Tirone, 2013; Gon-

⁴ El término “squat” se utilizó en el Reino Unido y ahora en Estados Unidos y Francia. En España se emplea más bien el de Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA); en Italia, “centro sociale”; y en otros países europeos, “social center”.

zález, Martínez, & Barranco, 2018) y provocar innovaciones en políticas urbanas (Breviglieri, 2013).⁵ Sin embargo, existen dos dimensiones menos apreciadas por la literatura especializada: las políticas públicas como objeto directo de investigación y la cuestión de los efectos de los movimientos de okupación sobre estas políticas. En este artículo se intenta completar el segundo aspecto con base en anteriores trabajos de sus autores (González, 2004, 2011; Aguilera, 2012) y en la actualización y descripción de estos procesos en tres ciudades españolas.

Globalmente, la cuestión de los impactos de los movimientos sociales es un área de oportunidad empírica y teórica importante. Por un lado, los especialistas de los movimientos sociales se focalizaron principalmente en los recursos que hacen posible la movilización (McCarthy, & Zald, 1977), sin tomar en cuenta la cuestión de los efectos por dos razones opuestas: algunos consideran que los movimientos siempre producen efectos sobre las políticas y que la única cuestión relevante es cómo (McAdam, & Snow, 2010); por el contrario, el modelo elitista supone que la frontera entre *policy insiders* y *policy outsiders* es tan hermética que los movimientos no tienen ninguna probabilidad de provocar cambios políticos (Skocpol, 2003).

Por otro lado, los especialistas de las políticas públicas no han considerado los movimientos sociales como una variable independiente relevante para explicar la concepción, la implementación y los efectos de las políticas públicas, sino que aceptan el marco teórico pluralista (Dahl, 1956) sin dar los datos empíricos para mostrarlo. En el mejor de los casos, existe un campo de investigación acerca de los grupos de interés, pero es un error considerarlos como movimientos sociales, porque estos grupos son ya *insiders* (Gomà, González, Ibarra, & Martí, 2018). Finalmente, cabe destacar la posibilidad de combinar los trabajos de movimientos sociales y políticas públicas con el desarrollo de la estructura de oportunidades políticas (Kitschelt, 1986; Kriesi, Koopmans, Duyvendak, & Giugni, 1995; Tilly, McAdam, & Tarrow, 2001), pero estos modelos son demasiado estáticos y no permiten pensar la implementación compleja de las políticas públicas. En definitiva, existen muchos obstáculos empíricos y teóricos que explican los pocos trabajos académicos sobre esta cuestión (Giugni, 2004).

Sin embargo, desde los trabajos seminales de Lipsky (1970) y Gamson (1975), los sociólogos norteamericanos han propuesto modelos más complejos de impacto, implicando grandes debates. Primero, sobre la definición de la variable dependiente: ¿qué significa impactar?, si los primeros trabajos hablaban de éxito-fracaso, los

⁵ Este artículo está escrito en el marco de la red de investigación europea Squatting Europe Collective, que reúne a especialistas académicos y activistas de los CSA europeos y americanos.

modelos más recientes prefieren evitar esta visión dicotómica con la idea de las consecuencias en términos de beneficios colectivos (Amenta, 2006). En segundo lugar, ¿cuáles son las condiciones que permiten la producción de los efectos más importantes? Inicialmente, la violencia y la ilegalidad de las acciones aparecían como un factor indispensable para hacer reaccionar a las élites (Piven, & Cloward, 1977), pero los modelos actuales son más complejos, porque el efecto de la disrupción depende de los contextos y, particularmente, de las relaciones con los *insiders* (Santoro, & McGuire, 1997). Las variables son interdependientes y no producen efectos en sí mismas, sino en combinación con otras (Ragin, 1997). Dentro de todos los modelos, el de la “mediación política” desarrollado por Edwin Amenta muestra que el apoyo de burócratas *insiders* dentro de la administración es un criterio esencial (Amenta, 2006).

Metodología

Empleamos los aportes de esta literatura para investigar con datos originales y en un estudio comparativo, los efectos de movimientos autónomos disruptivos, utilizando la ilegalidad y, a veces, la resistencia física en tres ciudades españolas.

Madrid, Barcelona y Bilbao son casos ideales para comparar los efectos del movimiento okupa sobre las políticas públicas. Las tres ciudades presentan una serie

de características similares. Tienen una metrópolis dominante de un área metropolitana (extremo obviamente mucho más acentuado en los casos de Madrid y Barcelona) en la cual las relaciones entre municipios y comunidades autónomas son conflictivas. Comparten también el hecho de ser territorios con muchos espacios urbanos abandonados y con precios muy altos en viviendas (Gutiérrez, & Delclòs, 2015). Son también —las tres ciudades— espacios de fuerte tradición de movilización social y suficientemente densos para encontrar una masa crítica en la expresión de cualquier contradicción política (López, & Rodríguez, 2013; Casellas, & Sala, 2017). Además, las ciudades elegidas son todavía referencia para muchos de los activistas radicales de Europa (SqEK, 2013).

Ahora bien, también existen grandes diferencias entre los tres casos en cuanto a tradiciones y estrategias políticas, así como distintos contextos socioculturales, que, por tanto, habrán de dar resultados también diversos con respecto al impacto en las políticas públicas. De entrada, Madrid, Barcelona y Bilbao actúan —en la práctica— como capitales de tres espacios nacionales distintos (España, Cataluña y el País Vasco), lo que se manifiesta en distintas articulaciones del tejido social, político y de comunicación. Por ejemplo, en Barcelona y Bilbao encontramos ecosistemas comunicativos propios de las naciones catalana y vasca, mientras que Madrid será

el espacio por excelencia de la batalla mediática entre los grandes grupos comunicativos del Estado español y la política de los grandes partidos. En cambio, los movimientos sociales alternativos, como el 15-M, tienen un impacto altísimo en Madrid y Barcelona, mientras que en Bilbao este ha sido menor. De hecho, si analizamos, por ejemplo, la composición de los gobiernos municipales en los últimos cuarenta años de democracia, veremos que en Bilbao no ha habido prácticamente alternancia política y la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha sido total. En cambio, Madrid y Barcelona han tenido una historia que empezó de forma similar con los gobiernos progresistas de la transición, el cual se alejó con la hegemonía de la derecha española del Partido Popular (PP) en los años de las décadas de 1990 y 2000 en Madrid, y converge a partir de 2015 con el gobierno en ambas ciudades de amplias coaliciones ciudadanas emanadas de los movimientos sociales y, en especial, del 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): ahora Madrid y Barcelona en Comú.

Este enfoque orientado a solo tres casos, nos permite capturar mejor la complejidad de un fenómeno como el del impacto de un movimiento social de carácter autogestionario en las políticas públicas, caracterizado por los efectos interactivos entre variables estructurales y de agencia, trayectorias dependientes, causalidad bi-

direcciona y múltiples actores estratégicos persiguiendo metas desconocidas. En suma, solo estudiando a fondo tres casos podremos analizar con suficiente complejidad las variables y las relaciones entre ellas y el efecto, tal y como defienden los partidarios del enfoque orientado por casos en política comparada (Bennett, & Elman, 2006; Mahoney, 2007). Los datos analizados provienen de diversas investigaciones realizadas sobre la realidad de este movimiento en varias ciudades desde los primeros años de la década de 2000 hasta la actualidad, además de nuestra participación activista en distintas experiencias. En estas investigaciones previas, se utilizaron sobre todo técnicas cualitativas, tales como entrevistas a profundidad —un total de cincuenta, tanto a activistas como a responsables políticos y técnicos de los gobiernos locales—, grupos focales (con miembros de CSOA) e investigación activista (Araiza, & González, 2017). También se llevó a cabo, en algunos periodos, un análisis cuantitativo de las noticias de prensa generadas por el conflicto entre las autoridades y el movimiento okupa (Barranco, González, & Martí, 2003; Alcalde, 2004; Debelle, 2010).

Resultados y discusión

Se presentan los resultados principales y la discusión académica que genera esta investigación. En un primer subapartado analizamos los movimientos por la oku-

pación en las tres ciudades españolas en los últimos treinta y cuatro años (1984-2018), desde la aproximación de los ciclos de movilización e integrando diferentes variables y características de estos movimientos a nivel local (historia del movimiento, tipos de okupación, número de okupaciones y visibilidad del movimiento). En el segundo subapartado presentamos los resultados de los tres casos a nivel de institucionalización del movimiento, describiendo a fondo algunos casos concretos e integrando aquí las variables de cambios o continuidad en los gobiernos locales. Finalmente, el tercer apartado aborda tres tipos de efectos de los movimientos de okupación en las políticas públicas (sustitución, “plagio” y desectorialización), apuntando algunos ejemplos significativos de los mismos.

1. Ciclos de movilización del movimiento okupa en Barcelona, Bilbao y Madrid

Siguiendo el enfoque dominante de los estudios de los movimientos sociales en términos de ciclos de movilización (Tarrow, 1995), podemos dividir la historia del movimiento por la okupación en cuatro etapas, con sus características diferenciadas, aunque cada uno de los casos presenta sus mecanismos propios heredados de historias y contextos variados. Los saltos de un ciclo a otro, se producen por cambios en la estructura de oportunidades políticas y se

reflejan en las características y número de okupaciones de viviendas y centros sociales en las tres ciudades españolas.

1.^{er} ciclo. Nacimiento y consolidación (1984-1995)

En Barcelona, la primera okupación se produjo en el barrio de Gràcia en diciembre de 1984. Otras okupaciones destacadas de esta primera etapa fueron el Ateneu Popular Cornellà (1986-2003) y la Kasa de la Muntanya (okupada en 1989 y todavía activa en 2019). En Madrid, una incipiente Asamblea de Okupas protagonizó la histórica okupación de Minuesa (1988-1994). En cuanto al País Vasco, el nacimiento del movimiento por la okupación ocurrió alrededor de los movimientos juveniles de los ochenta, cuando empezaron a aparecer *gaztetxes* (casas de los jóvenes —centros sociales okupados, en euskera—). Las más emblemáticas fueron las okupaciones de la Bolsa de Bilbao, la del Gaztetxe de Gasteiz (Vitoria), así como la del Euskal-Jai de Pamplona-Iruñea. Se trataba de “jóvenes con proyectos antimilitaristas, de radios libres, de música punk y rock, asamblearios, ecologistas, feministas (...) que no aceptarán un no de las instituciones y pasan a la acción directa de okupación de locales e inserción, de hecho, en la vida asociativa de dichas comunidades” (VV. AA., 2001, p. 122).

A partir de 1992, se produjo de forma generalizada una apertura del movimiento

con la entrada en el escenario okupa de planteamientos más globales y abiertos que en las primeras okupaciones, derivados de la incidencia del movimiento estudiantil, antimilitarista, feminista y altermundialista (González, Blas, & Peláez, 2002; Herreros, 2004; Martínez, 2007). Las luchas contra megaeventos en un contexto de reestructuración capitalista de las grandes ciudades contribuyeron también a cristalizar alrededor de los CSOA a una emergente y novedosa crítica al nuevo urbanismo capitalista: a) Juegos Olímpicos de Barcelona, b) Exposición Universal de Sevilla y c) Capitalidad Cultural de Madrid (Martínez, 2004).

2.º ciclo. Un movimiento sobreviviendo a la penalización (1996-2000)

La penalización de la okupación por vía legislativa con la reforma del Código Penal en 1996, marcó el inicio de una expansión considerable del movimiento a nivel nacional. La estrategia de represión del movimiento por parte de las instituciones confirmaba la criminalización y represión violenta impuestas por los gobiernos locales y nacionales. La aprobación del Nuevo Código Penal provocó paradójicamente la revitalización y crecimiento del movimiento, junto con el salto a la arena mediática con los espectaculares desalojos del cine Princesa en Barcelona y de la Guindalera en Madrid y el Gaztetxe de Bilbao.

En Cataluña, las okupaciones pasaron de cuarenta a ciento cincuenta en dos años (la mayoría de ellas localizadas en el área metropolitana de Barcelona), mientras que en Madrid y Bilbao el crecimiento no fue tan espectacular. En Madrid, el número de okupaciones pasó de treinta a quince en 1996. Pero, la represión no mató al movimiento, que permaneció gracias a la organización de solidaridades de barrio. En 1997, en Madrid un grupo de jóvenes abrió el Laboratorio 1 en Lavapiés, atrayendo a artistas y familias del barrio. Los okupas toman una nueva imagen, más accesible y cercana a las problemáticas cotidianas. En Barcelona y Madrid el movimiento de Okupación adoptaba a finales de los noventa el nombre de Centros Sociales Okupados —y más adelante añadirían Autogestionados—, como una forma de enfatizar el carácter abierto y social del espacio frente a las “casas okupas” de los años anteriores, que tenían un carácter más sectorizado y cerrado basado en una identidad okupa más fuerte. Sin embargo, en el caso de Bilbao, el movimiento okupa mantuvo —y sigue manteniendo— su propia identidad como Gaztetxes, en euskera, la casa de los jóvenes, al margen de las tendencias en el Estado Español. A diferencia de los otros dos casos, en Bilbao la entrada en vigor del nuevo código penal no ayuda a estabilizar al movimiento. De hecho, algunos okupas bilbaínos se desplazan a asambleas en Madrid y Barcelona con el

fin de idear e intercambiar estrategias de lucha, pero la movilización decae (Padrones, 2017).

Tanto en Barcelona como en Madrid, okupa se convirtió en el referente de los movimientos sociales juveniles radicales y protagonizó manifestaciones, resistencias a desalojos y un gran número de okupaciones. En Bilbao, la segunda mitad de los años noventa se caracterizó por la incorporación de una nueva generación de gaztetxes como son Kukutza (primer intento en 1996 y consolidación en 1998) y Sorgintxulo (1999). Estos proyectos tienen, sin embargo, sus diferencias: mientras el primero se alinea con la lógica de los Centros Sociales Okupados en el resto del estado en cuanto al grado de apertura del proyecto, el segundo supone un ejemplo de continuismo del movimiento de gaztetxes, más cerrado en la lógica juvenil.

Hacia los años 1999 y 2000, el movimiento empezaba a reflejar ciertos síntomas de cambio. Por un lado, los espacios de coordinación y organización internas se fueron perdiendo para afirmar las identidades particulares; por otro, la estrategia represiva del Estado y de los actores formales de la arena política generó un estado de conflicto permanente que llegó a su punto álgido en 2001, con las detenciones de algunas personas relacionadas con la protesta okupa, acusadas de pertenecer a ETA en Barcelona o a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) en

Madrid (Asens, 2004). La criminalización del movimiento facilitó el aumento en el número de desalojos, sin embargo, se incrementaron también las nuevas okupaciones, especialmente en Madrid, donde llegaron a 32 en 1997 (Martínez, & García, 2012), y en Barcelona, cuyo pico de desalojos (32 en 2001) (Debelle, 2010) no impidió que se consolidaran 27 CSOA por año en ese mismo periodo (Debelle *et al.*, 2018).

3.º ciclo. Apertura y diversificación (2001-2010)

Son diversas las aportaciones que apuntan hacia el inicio de un nuevo ciclo en el movimiento de las okupaciones, a partir del año 2001 (Martínez, 2007; Herreros, 2004; González *et al.*, 2002). Los cambios operados en las estructuras de oportunidad política del movimiento fueron provocados, entre otros elementos, por el hecho de encontrarnos desde 1999 (Seattle) en un nuevo ciclo de protesta a escala internacional: el de los nuevos movimientos globales o movimientos antiglobalización.

En este periodo el movimiento se hibrida con otros movimientos como el alterglobalizador, el vecinal, los sectores precarios del movimiento obrero o el de vivienda digna en 2006 (González, 2018). Desde el interior de estos, la práctica de la okupación se extiende y desde otras subjetividades e identidades diferentes a la okupa, se recurre a la okupación como una herramienta potente de lucha.

En Barcelona nacen nuevas okupaciones como la Rimaia —protagonizada por el movimiento estudiantil universitario—, Barrilonia —por parte del movimiento de inmigrantes— o las de huertos urbanos —por parte de coaliciones heterodoxas de activistas de la permacultura y la agroecología—. Los CSA que anuncian sus actividades en la plataforma Info-Usurpa, pasaron de 30 en 2001 a 60 en 2010 (Debellé, 2010, p. 18). El número de okupaciones en el área metropolitana de Barcelona, era de 155 en 2004 (González, 2008, p. 58) y de 200 en 2008 (Cattaneo, 2008, p. 43). De estas okupaciones, 35 eran CSA en 2004 y 39 en 2007 (Miró, 2008, p. 91). Según l'Oficina de l'Okupació de Barcelona (que asesora a personas interesadas en okupar viviendas abandonadas), el número acumulado (sin restar los desalojos) de CSA en Barcelona (área metropolitana) ha sido de 445 entre 1987 y 2008 (Miró, 2008, p. 91).

Al mismo tiempo, en Madrid, la aparición de nuevas subjetividades okupas, como los Laboratorios y la Escalera Karakola en Lavapiés, el Patio Maravillas en Malasaña o el CSA Seco en Puente de Vallecas, parece confirmar esta tendencia a la apertura y la hibridación entre el movimiento okupa, las Asociaciones de Vecinos (AA. VV.) y otros movimientos contestatarios. A pesar de una fuerte resistencia contra los procesos de negociación con las autoridades, al-

gunos casos de legalización⁶ aseguran una base estable para desarrollar vínculos con los barrios.

En Bilbao, el momento de explosión del movimiento vendrá bien entrada la década de 2000. Es así como a los dos *gaztetxes* ya consolidados, se les suman otros seis, a pesar de que tan solo cuatro de ellos conseguirán resistir la fuerte estrategia represiva llevada a cabo por el entonces alcalde Iñaki Azkuna. De esta manera, se empieza a vislumbrar un mapa de *gaztetxes* en Bilbao organizado a través de la surgida coordinadora BOM —Movimiento de Okupación de Bilbao—. A pesar de eso, el movimiento de okupación en Bilbao no supone un ejemplo de hibridación con otros movimientos sociales como son los casos de Barcelona y Madrid. Efectivamente existe contacto y cooperación con otros movimientos, pero no se produce una nueva sinergia ni el surgimiento de nuevas subjetividades okupas. La línea divisoria entre el movimiento de *gaztetxes* y sus estrategias y los otros movimientos sigue siendo relativamente nítida.

Finalmente, a pesar de la poca presencia de viviendas okupadas, en 2007 se crea la Oficina de Okupación de Bilbao, que da asesoramiento a la ciudadanía para buscar alternativas al problema de la vivienda en el ámbito de la okupación.

⁶ En concreto, La Prospe, Seco y Escalera Karakola, además del peculiar caso de Tabacalera.

4.º ciclo. Respuestas sociales a la crisis: confluencias y divergencias en torno a la okupación (2011-2018)

Los CSOA se vuelven centros neurálgicos de la contestación y la solidaridad ante las consecuencias de la crisis económica en los barrios españoles. La PAH, las asambleas del 15-M y otras formas organizativas barriales recurren entre los años 2011 y 2018 a la okupación de edificios de viviendas para hacer frente al drama de los desahucios, especialmente en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid (González, 2015).

El 15-M impulsa una nueva dinámica y se observa una “convergencia” con el movimiento okupa (Martínez, & García, 2012). Por un lado, los okupas participaron individualmente en la iniciativa y la organización del 15-M. Ayudaron con su experiencia de okupación y autogestión. Como están activos en las asambleas de barrio, encuentran a familias expulsadas por bancos o inmigrantes que buscan vivienda, ganan nuevos activistas, enseñan a la gente a okupar su propia casa (oficinas de vivienda) o abren directamente edificios para realojar a los más precarios. Por otro lado, podemos asignar al 15-M casi veinte nuevas okupaciones en Madrid Región (Martínez, 2013), mientras que la PAH, a través de su campaña llamada Obra Social, okupa decenas de viviendas para familias que habían perdido sus casas a consecuencia de la crisis de las hipotecas, especialmente en las zonas de Barcelona y

Madrid (Martínez, 2018). La consecuencia de esta convergencia es una legitimación de la okupación ilegal de vivienda como medio último de supervivencia en periodos de crisis económica y de las hipotecas, y por lo tanto, de todo el movimiento okupa (Barranco, González, & Llobet, 2016). Así, pues, el movimiento de okupación de centros sociales se abre más a la okupación para vivienda, siguiendo el modelo francés de la lucha por la vivienda (Péchu, 2010; Aguilera, & Bouillon, 2013) o lo que Hans Pruijt (2004; 2013) llama “okupa de privación”.

En Bilbao, a pesar de que en estos años reapareció el fenómeno de la vivienda okupada y la correspondiente Oficina de Okupación, la poca relevancia que tuvo en su momento el 15-M y la todavía incipiente PAH, no se tradujo en un aumento significativo de la práctica de la okupación. Desde esta Oficina se contabilizaron en 2013 unas veinticinco viviendas okupadas no reivindicadas (<http://okupaziobulegoa.blogspot.com.es>). En 2013 en Bilbao encontramos cinco proyectos de okupación en marcha después de que se desalojaran en los dos años anteriores Kukutza III y los Gazte Lokala de Irala. En 2017, tomando en cuenta el Gran Bilbao (incluyendo los municipios colindantes de Getxo, Barakaldo, Erandio, Galdácano y Basauri), podemos afirmar que existían 6 *gaztetxes* (Padrones, 2017).

El estudio comparativo de los ciclos de movilización en las tres ciudades permite destacar convergencias fuertes en los tres territorios, pero también particularidades históricas y locales sustanciales, especialmente en Bilbao. Estos movimientos madrugadores radicales, bastante cerrados en su inicio, respondieron con éxito a la penalización de la okupación en 1996 y establecieron alianzas con otros movimientos urbanos. Este cambio aparece como un factor de dessectorialización de las luchas sociales y de aumento de las oportunidades de impacto sobre las políticas públicas. Sin embargo, los efectos en estas últimas dependerán también de los actores institucionales, como veremos a continuación.

2. Una institucionalización tímida de la relación okupas-autoridades con oportunidades de innovación social y política

A pesar de su voluntad de autonomía frente al poder político, las okupas están en permanente relación con los actores públicos o privados (propietarios), de una manera u otra (Martínez, 2013). Más allá de que las negociaciones sean forzadas, deliberadas o efímeras, los activistas y habitantes no pueden evitar los procesos de institucionalización.⁷

⁷ Una gran parte de la literatura acerca de los movimientos sociales muestra que la institucionalización de luchas, los burocratiza, por lo que pierden sus identidades (Castells, 1983), su radicalidad (Kriesi *et al.*, 1995) e, incluso, sus líderes pueden ser cooptados, lo que desemboca en la muerte del movi-

De manera general, se puede definir la institucionalización de un movimiento social como “la integración dentro de un modelo estable de reglas formalizadas y de leyes” (Pruijt, 2003, p. 134). Pruijt (2003) y Martínez (2013) distinguen tres formas de institucionalización y tres tipos de consecuencias sobre los movimientos de okupación. La primera corresponde a la asimilación por la legalidad (institucionalización terminal), que puede provocar la muerte del movimiento si se combina con una represión fuerte por parte de los resistentes. La segunda forma corresponde a la cooptación de los miembros menos radicales sin provocar la muerte de los movimientos. La tercera forma, la más común en Europa, es la institucionalización flexible, que implica la persistencia de las estrategias autónomas, a pesar de casos temporales de legalización o negociación. Es lo que ha ocurrido en Brighton (Dee, 2014), Amsterdam (Owens, 2016), París (Aguilera, 2012), Madrid (Martínez, 2013) y Barcelona (González, 2011). En muchas ocasiones, las negociaciones fueron posibles con la intervención de las administraciones locales, mientras que el Estado-nación gestionaba las cuestiones de seguridad y los desalojos policiales.

A continuación, se exponen los resultados de la investigación en términos de ins-

miento (Piven, & Cloward, 1979). Sin embargo, algunos trabajos muestran que la institucionalización permite atraer nuevos activistas (Suh, 2011).

titucionalización e innovación social en cada uno de los tres casos.

Madrid: excepciones que confirman la regla represiva y oportunidades de influencia sobre las políticas públicas

Por un lado, en Madrid, la mayoría de los colectivos rechaza toda forma de legalización (Martínez, 2010). Por otro lado, las autoridades casi nunca han considerado la idea de negociar con okupas. A pesar de este cierre de las oportunidades políticas, se suelen destacar tres casos de apertura simultánea de la gobernanza municipal y de los colectivos en la historia de la okupación madrileña (González, 2004; Martínez, 2010).

El primero es el de la Escuela Popular de Prosperidad, también conocida como La Prospe. En 1977, un colectivo de profesores y activistas que habían desarrollado actividades educativas para adultos, ocupó un antiguo edificio del partido fascista y único permitido durante la dictadura del general Franco (1939-1975), Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y JONS). En la primera legislatura democrática (1979-1983), fueron realojados por los responsables socialistas del distrito en un edificio del mismo barrio. En 1983 obtuvieron un contrato en un edificio de la iglesia, que finalmente ganó el proceso jurídico en 1999. En este momento, La Prospe había perdido el apoyo municipal debido a la entrada en el gobier-

no local del PP. Después de una lucha social larga, el Departamento de Educación de la Comunidad de Madrid decidió realojarlos en octubre de 2000 con un convenio de cincuenta años (González, 2018).

El segundo ejemplo es la Eskalera Karakola, centro social de activistas feministas. Okuparon un edificio privado en 1996 y pidieron la expropiación al ayuntamiento. De nuevo, después del fracaso jurídico, el apoyo del barrio (Red de Lavapiés) y de urbanistas profesionales forzó a la municipalidad, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), a firmar un convenio (González, & Araiza, 2016).

El último ejemplo es el CSOA Seco en el sur de Madrid (barrio de Adelfas, distrito de Retiro). Un grupo de jóvenes —el Kolectivo Adelfas Joven (KAJ)— ocupó en 1991 un colegio abandonado a punto de ser destruido. Sin embargo, a causa de conflictos internos, se retiraron del inmueble. Luego, en 1997, el mismo edificio fue ocupado por otro colectivo (Zona Roja) que construyó relaciones fuertes con los habitantes del barrio, las asociaciones de vecinos y la parroquia. Decidieron trabajar sobre problemas de drogas con los jóvenes del barrio. Fueron apoyados por urbanistas y arquitectos para proponer un proyecto urbano alternativo. Pidieron también un realojamiento del centro social dentro del barrio. Después de una larga campaña de lucha popular, la Junta del Distrito de Retiro fir-

mó un convenio con Seco en 2007 sobre un edificio de la EMVS (González, 2018).

En cada caso, la legalización fue el resultado del encuentro de cuatro factores: 1) Los colectivos okupas no reivindicaban proyectos radicales, sino proyectos de barrio que se volvieron sustituciones de servicios públicos: La Prospe (proyecto educativo), la Eskalera Karakola (feminismo y actividades de barrio para mujeres), Seco (proyecto urbano y de juventud); 2) Los colectivos aceptaron formalizarse como asociaciones; 3) Los colectivos obtuvieron un apoyo fuerte de los vecinos; y 4) Las autoridades locales intervinieron para frenar los procesos jurídicos en contra de estas okupaciones. Sin embargo, no observamos ninguna institucionalización de la política urbana hacia okupaciones, por ejemplo, en París (Aguilera, 2018). El paradigma general sigue siendo la represión del Estado y la no intervención positiva del ayuntamiento (quien puede también pedir expulsiones).

Barcelona: un velo de negociación sobre un diálogo de sordos

La densa red de okupaciones que existe en Cataluña, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, ha facilitado que el debate de la negociación se planteara antes que en otros territorios del Estado y que surgiera en muchas ocasiones desde las propias administraciones públicas. La casuística de los procesos de negociación

es interminable, en especial si la entendemos —a la negociación— desde un punto de vista amplio, de procesos de diálogo directo o intervenido entre gobiernos locales y okupaciones. En este apartado resumiremos tres procesos (Torreblanca, Can Masdeu y Espai Social [Es] Magdalenes), que pueden ilustrar la realidad de la negociación en Cataluña, que dista todavía del camino hacia la legalización de los centros sociales okupados, pero que genera impactos en las políticas públicas. En todo caso, se ha tratado también de iniciativas aisladas que no han contado con el apoyo de la mayoría del movimiento ni con el más mínimo interés de negociación real por parte de las administraciones anteriores a la entrada del gobierno municipal a Barcelona en Comú, en 2015, que sí supone un cambio en este sentido.

El primer caso, el del CSOA Torreblanca de Sant Cugat del Vallès, ilustra al sector del movimiento que pretende afrontar los procesos de negociación con las instituciones y también el desengaño con sus resultados. En marzo de 1999 un grupo de jóvenes okupó una masía, propiedad del ayuntamiento, que llevaba abandonada veinte años, a pesar de haber sido declarada Patrimonio Histórico. La masía enseguida se convirtió en centro social y vivienda. Debido al fuerte y amplio apoyo social de esta okupación, el ayuntamiento de esta ciudad limítrofe con Barcelona (gobernada por una coalición de centroderecha

entre Convergència i Unió [CIU] y PP), inició contactos con los okupas. La propuesta del ayuntamiento era establecer un convenio según el cual la masía de Torreblanca, se convertiría en un equipamiento municipal en donde realizar actividades por parte de grupos y asociaciones del municipio. La asamblea del CSOA Torreblanca creó una asociación legalizada, Las Masoveres y Missifú, para facilitar la negociación. El CSOA Torreblanca estuvo abierto al tejido asociativo del municipio y protagonizó, junto a varias entidades juveniles, la generación —desde la base— de un Consejo Local de Jóvenes. Pero los okupas apostaban por un modelo de gestión abierto, no dirigido por el ayuntamiento y que reconociera, mediante la “legalización” de la okupación, la tarea realizada por la misma. En el verano de 2000, aunque las negociaciones continuaban formalmente, se produjo un intento de desalojo, resistido de forma no violenta por los okupas, quienes dieron un golpe de efecto importante y se ganaron la simpatía de la opinión pública catalana. En julio de 2001, ante una nueva amenaza de desalojo, los y las okupas de la casa presentaron, a través de una rueda de prensa y con el apoyo del Consejo Local de Jóvenes y un importante grupo de vecinos, una propuesta de pacto al ayuntamiento. Abandonaban voluntariamente la masía a cambio de la retirada de las denuncias que el ayuntamiento mantenía en contra de algunas personas de la casa

y, sobre todo, a cambio de que la casa pasara a ser gestionada por el Consejo Local de Jóvenes. El convenio aceptó ambas demandas de los okupas y habilitó al Consejo Local de Jóvenes para elaborar un Plan de Uso y Gestión de la Masía de Torreblanca, que pasaba a ser un equipamiento municipal para jóvenes autogestionado por estos. El ayuntamiento, que “recuperó” la titularidad del edificio liberado por los okupas, lo cedía en régimen de autogestión al Consejo Local de Jóvenes, pero se reservaba el derecho de instalar algún servicio directamente. El acuerdo provocó fuertes críticas del movimiento por la okupación catalana. Info-Usurpa, agenda del movimiento, declaró que dejaba de dar noticias de Torreblanca.

Los miembros más activos de Torreblanca abandonaron el proyecto después de la negociación e impulsaron la okupación de otra masía, esta vez en el municipio de Barcelona. Así, el 22 de diciembre de 2001 se okupó Can Masdeu, en Nou Barris (distrito barcelonés de carácter popular), abandonada desde hacía cuarenta y siete años, propiedad de la Fundación del hospital de Sant Pau y gestionada por la Muy Ilustre Administración (MIA), de la cual forman parte el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, entre otros. Can Masdeu se convirtió enseguida en referente de la okupación rurbana, tanto por su papel de dinamizador de las luchas vecinales y en contra de la globalización

capitalista como por su práctica de recuperación de antiguos pozos y minas de agua, uso de energías renovables, reciclaje y reutilización de todo tipo de materiales y rehabilitación de la masía con obras avaladas por el Colegio de Arquitectos. El éxito sin precedentes en la resistencia activa no violenta al desalojo de mayo de 2002, abrió un incierto proceso de negociación que paró durante años los requerimientos judiciales contra la okupación de esta masía. Can Masdeu ha supuesto la recuperación de un espacio público, dinámico y abierto para los vecinos de Nou Barris, en especial con sus proyectos de huertos urbanos y de educación medioambiental, que cuentan con la participación de centenares de vecinos en la actualidad. La entrada en el gobierno municipal de Barcelona en Comú en mayo de 2015, dio un vuelco a la relación de esta okupación con las autoridades municipales y se abrió una vía de diálogo con propuestas de regularización no formales por parte de los propietarios, así como la posibilidad de un convenio entre okupas, administración y propietarios de la finca (De Miguel, 2018). Todo ello, sin perder la esencia autónoma y autogestionada de este proyecto (Solé, & Biescas, 2018).

También se ha estudiado el caso del ES Magdalenes. Este espacio okupado ubicado en Ciutat Vella (Centro Histórico de Barcelona) tenía por objetivo fomentar la autogestión, así como promover y alojar

iniciativas que garantizaran el ejercicio y la defensa del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho a la libertad de movimientos de las personas migrantes, el derecho a la participación política y el derecho al libre acceso y producción de cultura (<http://magdalenes.net/?q=ca/taxonomy/term/48>). Se trataba de un edificio entero, con viviendas y centro social, que fue okupado en mayo de 2005. Desde el principio contó con el apoyo de los vecinos “legales”, víctimas del acoso inmobiliario y de las intenciones de construir un hotel en aquel local. El uso de estrategias de enmarcamiento positivas ante los medios de comunicación y su disposición explícita a la negociación, enfrentaron a parte del movimiento, pero al mismo tiempo facilitaron su continuidad, a pesar de encontrarse en pleno centro de Barcelona. El primer intento de desalojo, el 15 de febrero de 2010, fue frustrado gracias a la concentración de centenares de vecinos y movimientos sociales del barrio. El 1 de abril de 2010 se acabó ejecutando el desalojo, poniendo fin a un proceso de diálogo donde los okupas presentaron múltiples propuestas, lo cual los convirtió en blanco de las críticas del grueso del movimiento.

En todo caso, el ES Magdalenes generó redes e iniciativas culturales y políticas desde las cuales se plantearon soluciones a la creciente gentrificación, el acoso inmobiliario, la presión turistificadora, el éxodo poblacional y de actividades, y el debili-

tamiento de las redes sociales existentes y de acogida de la población migrante. Durante cinco años, el ES Magdalenes fue un sitio de encuentro para asociaciones vecinales, movimientos en defensa del derecho a la vivienda (VdeVivienda; Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbánística), movimientos en defensa de los derechos de las personas migrantes (Espacio de Desobediencia a las Fronteras), así como de iniciativas que promueven el uso del *software* libre y apuestan por un acceso no restrictivo a la producción y distribución cultural (González, 2018).

Se da la circunstancia de que una de las personas más activas de este CSOA, era Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde mayo de 2015, lo cual explica el cambio de orientación radical del ayuntamiento al afrontar procesos de negociación con centros sociales autogestionados a partir de 2015. Un último caso del escenario de negociación abierto con la entrada del nuevo gobierno de los comunes en Barcelona, es el de la emblemática Kasa de la Muntanya en el barrio de La Salut, distrito de Gràcia, que después de casi treinta años de okupación transita hacia la fórmula de cooperativa de viviendas sociales (Tarín, 2017; Rodríguez, 2018).

Bilbao: de la tolerancia a la represión sistemática

En Bilbao encontramos tres grandes momentos diferenciados, a pesar de alejar-

se, igualmente, de los posibles escenarios anteriormente apuntados. Un primer momento, en la década de los ochenta, de silencio o tolerancia hacia las pocas experiencias de okupación aparecidas, acompañadas por la voluntad de cesión pública de algunos espacios para ser ocupados por las asambleas de jóvenes de algún barrio. Este escenario se ejemplifica a través del caso de Deusto, cuya asamblea de jóvenes llevará a cabo un proceso de negociación con la administración local por el que esta se compromete a cederles un espacio. Cuando las obras del local para su habilitación estaban a punto de terminarse, se produjo un cambio en la alcaldía que rompió el acuerdo alcanzado (EAP-UAB, & UPV, 2002). Este cambio llevará, a pesar de mantenerse el mismo partido —PNV— en el gobierno, a un giro en la actitud hacia la okupación.

El segundo momento, en la década de los noventa, se caracterizará por la voluntad de la administración para acabar con el incipiente fenómeno okupa, a pesar de que tras los incidentes que tuvieron lugar en el marco del desalojo del *gatzetxe* de Bilbao, el ayuntamiento se ve forzado a abrir procesos de negociación ante nuevas okupaciones. Tras la ruptura de los acuerdos con la Asamblea de Jóvenes de Deusto, estos deciden llevar a cabo una okupación, que será respetada y normalizada por el propio ayuntamiento. El segundo caso corresponde al barrio de Irala, en el que tras desalojar un chalet de titularidad pública

okupado por la Asamblea de Jóvenes del barrio, el ayuntamiento se ve forzado a ceder de forma provisional unos locales públicos mientras se reconstruía el edificio para poder ser okupado de nuevo por los jóvenes. Sin embargo, el chalet nunca se llegó a reconstruir y los jóvenes han sido, veinte años después, finalmente desalojados de los locales cedidos.

El tercer momento corresponde al mandato del alcalde Iñaki Azkuna (1999-2014) del PNV, caracterizado por la explosión del movimiento, por un lado, y por el hermetismo de la gobernanza urbana, acompañado por una fuerte estrategia represiva por parte del ayuntamiento, que más que mediar entre los okupas y los propietarios, aprovecha la titularidad pública de los edificios para acelerar los procesos de desalojo. El caso más claro de este tercer escenario, es el del *gaztetxe* Kukutza III en el barrio de Rekalde, desalojado en septiembre de 2011 en medio de fuertes disturbios. El ayuntamiento no solo hizo oídos sordos a las reivindicaciones, tanto de los propios jóvenes como del barrio en su conjunto, sino que abanderó el proceso de desalojo argumentando que en Bilbao no había lugar para este tipo de iniciativas.

A diferencia de Barcelona y Madrid, en Bilbao el movimiento de okupación ha aceptado de una forma más natural los casos de institucionalización. De hecho, se ha bautizado a los proyectos de okupación como *Gaztetxes*, en euskera, la casa de los

jóvenes, dejando de lado la condición de okupas. De esta manera, a pesar de que el origen de los *gaztetxes* ha sido en su mayoría proyectos de okupación, cabe la posibilidad de que estas casas de jóvenes estuvieran bajo otras condiciones de legalidad sin que se marcara una diferencia entre los proyectos legalizados o los proyectos que eran efectivamente okupaciones de espacios. Proyectos legalizados –como el caso de Deusto y el de Irala– y proyectos de okupación han convivido, colaborado y compartido identidad en Bilbao.

*

En síntesis, las relaciones entre el mundo okupa y las autoridades son tímidas y la policía suele ser casi el único contacto con los actores públicos. Sin embargo, los centros sociales siguen funcionando en autonomía y resistencia a la represión, y desarrollan proyectos locales innovadores que, en algunos casos, atraen la atención de responsables locales que intentan su reappropriación por vía de negociaciones y de convenios más o menos flexibles, dirigidos a activistas bastante hostiles a la formalización institucional de sus acciones. En estos casos, los centros sociales impactan más allá de la esfera okupa, es decir, también sobre políticas públicas en general.

3.3. Efectos de la okupación sobre políticas sociales, de vivienda, cultura y juventud

Los conflictos establecidos por los centros sociales no solo tienen efectos en la gestión

propia de las okupaciones y su normalización, sino también sobre políticas más generales que se dividen en cuatro sectores: sociales (particularmente educación), de vivienda, de cultura y de juventud. Estudiar los impactos de los movimientos en las políticas públicas no solo implica distinguir los sectores, sino también los niveles de administración afectados. Es necesario hacer un análisis intersectorial y multinivel de la gobernanza urbana (Halpern, & Dupuy, 2009). En el siguiente apartado, explicaremos los diferentes tipos de efectos del movimiento okupa sobre las políticas públicas en los casos estudiados.

Sustitución e implementación directa

La acción colectiva puede traducirse también en una implementación directa de servicios públicos de manera autónoma, sin esperar la intervención gubernamental a través de políticas públicas (Andrews, 2001). En primer lugar, las okupaciones ilegales de edificios son una respuesta directa a la crisis de la vivienda, la cual es el primer derecho humano, por lo que cuando los mercados excluyen a los más pobres y las políticas públicas fallan en su función de dar un techo a todos los ciudadanos, la okupación es una sustitución. Por otro lado, los CSOA están abiertos y proponen muchas actividades para los habitantes del barrio. No solo participan en la animación del movimiento social, sino que también contribuyen a la sociabilidad

local cotidiana. En este sentido, aseguran funciones públicas de gestión de la ciudad en lugar de la municipalidad. Los CSOA sustituyen a los centros culturales, sociales o de juventud en Madrid, Barcelona y Bilbao, que en gran parte del periodo estudiado no proponían los servicios adecuados a la demanda. Los CSOA son también laboratorios de experimentación de varias prácticas sociales y de democracia directa, que permiten a los habitantes participar en el mundo urbano y tomar decisiones en un modelo horizontal de autogestión. Aparecen como un nuevo corazón de una democracia más directa y como alternativa a un gobierno representativo. Además, podemos mencionar los servicios jurídicos o sociales que encontramos únicamente en los CSOA, porque la administración no tiene la voluntad política, el dinero o las competencias. Por ejemplo, las Oficinas de Derechos Sociales (ODS), la enseñanza del castellano, catalán o euskera, las Oficinas de Vivienda y las de ayuda a los inmigrantes y precarios de los barrios.

Un ejemplo de sustitución o implementación directa lo tenemos en el caso de Tabacalera, en Madrid.⁸ Tabacalera fue el resultado de diez años de lucha por parte de la Red de activistas y vecinos del barrio de Lavapiés, quienes reivindicaron el uso de la antigua fábrica de tabaco de 30 000 m² de propiedad pública estatal

⁸ El caso de Can Batlló, en Barcelona, se puede considerar similar.

(Ministerio de Cultura). El Ministerio de Cultura intentó implementar varios proyectos que fracasaron, debido a la falta de fondos públicos. Una persona clave, Ángeles Albert, entonces directora de Gabinete del Ministerio de Cultura, propuso delegar la gestión temporal del edificio.

Empezaron las negociaciones con algunos líderes del entorno okupa y artistas del barrio. Al principio, el Ministerio de Cultura propuso la organización de algunos eventos culturales durante algunos meses, pero la Red de Lavapiés rechazó la oferta para pedir la gestión permanente del lugar. Ganaron un convenio de un año y dieciocho mil euros de subvención para los artistas, y luego —después de otras negociaciones y justo antes de las elecciones de 2011 que darían el poder al PP— un convenio para ocho años. El proceso pudo ocurrir gracias a tres circunstancias concomitantes: primero, la incapacidad del Ministerio de Cultura de gestionar el lugar en tiempo de crisis, y la ausencia de un proyecto creíble y viable; segundo, el papel individual que desempeñó la directora de Gabinete del Ministerio de Cultura; y tercero, la fuerza de la campaña de la Red de Lavapiés y el gran apoyo popular que suscitó.

Pero el interés de los actores públicos por Tabacalera va más allá del propio edificio. Dos interpretaciones pueden aclarar esta apertura. Primero, dar un edificio a los activistas es un modo de controlarlos

y evitar otra okupación ilegal en el barrio. Puede, incluso, legitimar futuros desalojos de otros espacios, justificando que no se necesitan. Segundo, Tabacalera pertenece a un triángulo geográfico entre Lavapiés/Atocha/Legazpi en el sur de Madrid. La municipalidad tiene efectivamente un proyecto de renovación-gentrificación que utiliza masivamente infraestructuras culturales para construir una “ciudad creativa” (Florida) con cultura alternativa (Casa Encendida, Reina Sofía-Atocha, Medialab-Prado, Matadero-Legazpi). Tabacalera ha sido pasivamente integrada en este eje cultural.

En el caso de Bilbao observamos cómo los *gaztetxes* surgen de una necesidad claramente identificada de locales para los jóvenes en los diferentes barrios. Así, pues, los *gaztetxes* aparecen como claros sustitutos de la administración pública a la hora de ofrecer ciertos servicios, sobre todo en relación al ámbito cultural, abiertos a la ciudadanía en general y, en muchos casos, dirigidos expresamente a las necesidades barriales. Es así como los *gaztetxes* llevan la filosofía de la autogestión también al ámbito cultural, a través de una programación propia, pero también abriendo el espacio a otras iniciativas que encuentran en estos espacios las facilidades infraestructurales y de gestión que la administración no ofrece. Un claro ejemplo de ello es la ubicación de la sede de la Asociación de Malabaristas de Bizkaia en el *gaztetxe*

Kukutza III, en la que se celebró el Encuentro Koblakari (<http://www.koblakari.org>), uno de los principales encuentros de circo a nivel europeo, entre 2004 y 2011 (KGK, & Egia, 2011). En esa misma línea, en Barcelona, los artistas circenses han encontrado alojamiento en sucesivos centros sociales, como Les Naus o La Makabra.

Todos estos proyectos aparecen como puentes entre el mundo de los okupas —de las luchas de calle— y las instituciones públicas. No son solo puertas de entrada para las innovaciones sociales, políticas y culturales, sino también base de inspiración para élites, gabinetes políticos y funcionarios para implementar nuevas (o recicladas) políticas urbanas.

Cuando los actores públicos plagian a los centros sociales

Existen diversos casos en los que los actores públicos “roban” o “toman prestadas” las ideas de los okupas. Hace más de diez años que las grandes instituciones culturales copian la estética de los CSA, inspirándose en un paraíso perdido de la cultura *underground*.

En Madrid, este fenómeno se materializa en el proyecto municipal Matadero (Legazpi, sur de Madrid) no solo en lo estético, sino también en el modo de gobernanza y de organización. No hay un “director” sino un “coordinador”. La referencia de los responsables del proyecto a la idea de “autonomía” y “autogestión” de los centros

sociales, es permanente. Así, la programación de cada espacio del proyecto es autónoma para “evitar jerarquía”. La Casa Encendida (proyecto del banco Caja Madrid en la calle Ronda de Atocha) también funciona sobre el principio de colaboración horizontal. Los espacios están ocupados temporalmente por diferentes colectivos que desarrollan y deciden actividades juntos. El proceso de decisión se inspira también en las asambleas de okupas o las del 15-M. Los espacios tienen horarios más amplios, organizan conciertos y fiestas, y sobre todo son mixtos (proponen actividades diferentes y simultáneas). Participan en una “desectorialización” de la programación y de las políticas públicas.

En Barcelona hay múltiples ejemplos similares, como los centros cívicos de los distintos barrios, salas de conciertos semipúblicas, etcétera, pero nos interesa destacar el caso de uno, por su impacto en el nivel de políticas de juventud. Se trata del Espai Jove La Fontana de Gràcia de Barcelona. A iniciativa del consejero de Juventud del Distrito, en 2001 se iniciaron negociaciones con las entidades juveniles del barrio para decidir un Plan de Uso y Gestión para un nuevo equipamiento para jóvenes, que se habilitó, finalmente, en el año 2009. Las conversaciones del distrito con las entidades incluían implícitamente grupos no formales, puesto que toda una serie de entidades y grupos juveniles se estaban coordinando para negociar con

más posibilidades que este equipamiento fuera autogestionado por los propios jóvenes. Las reuniones se celebraban quincenalmente en locales vecinales como La Violeta o la Asociación de Vecinos de Gràcia. Hacia el año 2003, todos los grupos alternativos abandonaron el proceso al no garantizarse la autogestión y también por el hecho de que no cesaban los procesos de desalojo en contra de las casas okupadas del barrio. Es interesante el reconocimiento de los grupos no formales —entre ellos, el del movimiento okupa— como interlocutores sociales. En los primeros años, el Espai Jove La Fontana era utilizado por varios colectivos juveniles del barrio, incluidos los cercanos al movimiento por la okupación. Posteriormente, en enero de 2014, se dio un cambio en el modelo de gestión, y hoy este edificio es un equipamiento juvenil público del Distrito de Gràcia con una fórmula de gestión ciudadana y coordinado por el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), plataforma interasociativa que agrupa a las entidades juveniles de Barcelona. De alguna manera, este espacio ha transitado de un sector más autogestivo y movimentista de la juventud a otro más asociativo e institucionalizado.

En Bilbao, los numerosos intentos por parte de la administración local para desactivar un incipiente movimiento *gaztetxe* llevaron a la creación de los Gaztegunes, espacios para jóvenes gestionados por la administración local (EAP-UAB, & UPV, 2002;

Estebaranz, 2005). Esta práctica, que se dio en la década de los noventa, no ha conseguido suponer una alternativa a los *gaztetxes*, puesto que, a diferencia de otras experiencias en Madrid o Barcelona, resultan ser espacios muy limitados y gestionados desde la lógica administrativa, no adaptándose en formas ni en horarios a las necesidades reales de los jóvenes. Otro ejemplo que se dio a raíz del desalojo del *gaztetxe* de Bilbao, ha sido la creación del espacio Bilbo Rock. En este caso, el ayuntamiento rehabilitó una antigua iglesia situada al lado del Casco Viejo de la ciudad para la celebración de conciertos de música para jóvenes y se presentó el espacio como la compensación por el desalojo (Larrea, & Gamarra, 2007). A pesar de suponer una salida real para este tipo de música en Bilbao, se gestiona directa y únicamente desde la administración local, reproduciendo los mismos déficits ya apuntados.

La desectorialización de las políticas públicas

La tercera dimensión de incidencia de las okupaciones en las instituciones, se ve a través de la desectorialización de las políticas públicas que se difunden desde los CSOA hacia esferas institucionales. En las instituciones se garantiza la temporalidad de un proyecto cultural-social de mayor manera que en las okupaciones. La mayor durabilidad permite una consolidación y estabilidad de los proyectos sociales, políticos y

culturales. El concepto de gobernanza y de inscripción en el marco urbano que subyace en esta dimensión, es cercano a las concepciones de los CSOA. Las infraestructuras culturales no son solamente museos que acogen turistas durante los fines de semana, sino que son espacios de sociabilidad local que permiten el encuentro. Cultura es más que arte o pintura, es una práctica social y política democrática. Además, es un medio para desarrollar políticas públicas en tiempo de crisis financiera.

El Matadero de Madrid ilustra esta lógica. La municipalidad poseía un espacio abandonado sin fondos para renovar y sin ideas. “No teníamos ideas precisas sobre el proyecto. Era una experimentación sin fijar nada” (entrevista con el coordinador del Matadero, 2012). Decidieron conceder los espacios a actores privados y colectivos locales, para que desarrollaran actividades de manera casi autónoma. El coste de la renovación fue de cien millones de euros para 50 000 m²; 30 % venía de empresas privadas (entre otras, Red Bull), que asumieron 60 % de los costes de gestión. No estamos defendiendo el argumento de que los okupas son quienes provocaron la privatización de los espacios culturales, sino que la idea de apertura y de delegación de autonomía, de gestión y de programación a actores fuera de la propia administración, y sobre todo a colectivos locales, resulta de una difusión de innovaciones sociales de la base. Los activistas de los

centros sociales denunciaron este proyecto: no había verdaderamente coordinación ni apertura sobre el barrio y correspondía más a una privatización del espacio. Pero, al menos, se trata de un reconocimiento de la capacidad de acción de la sociedad civil: “los centros sociales hacen más que nosotros sin dinero y más durable” (entrevista con el responsable de las actividades públicas del Reina Sofía, 2012).

El director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel (previamente director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona [Macba]), propuso un proyecto colaborativo con la sociedad civil (okupas y otras organizaciones cercanas a los centros sociales, o movimientos sociales como el 15-M). Crearon la Fundación de los Comunes⁹ y el concepto de “nueva institucionalidad”. Consiste en abrir la cultura a la sociedad civil y también en aprovechar un momento de crisis económica y política para innovar. En un momento de fuerte crisis de las instituciones tradicionales “se pretende construir un territorio de experimentación compartida entre, por un lado, instituciones culturales o políticas con vocación desinstitucionalizadora, en el sentido de

9 Casa Invisible (centro social de Málaga), Traficantes de Sueños (librería activista de Lavapiés), Universidad Nómada (red de investigación activista), Ateneu Candela (Terrassa, Barcelona) e individuos de Patio Maravillas y Tabacalera. Podemos mencionar que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía participó en las negociaciones para legalizar la Casa Invisible y ayudó también al proyecto Tabacalera durante las negociaciones con el Ministerio de Cultura.

no capturadoras de lo otro y de superadoras de sus límites (...) y, por otro lado, unos espacios de cooperación autónomos con deseos de dotar de mayor estabilidad, consistencia e incidencia a sus prácticas, es decir, superadores, a su vez, de la precariedad a la que pretende condenarnos la globalización neoliberal” (FdIc, 2013, recuperado de <https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/va-esto-la-fundacion-comunes.html>).

Se han descrito en ese punto filiaciones y difusiones de ideas y prácticas entre la esfera de los CSOA y las instituciones públicas, a partir de un análisis de la red de gobernanza urbana. Es verdad que algunos activistas rechazan esta filiación o denuncian casos de cooptación que pueden ocurrir. Otros la reivindican. Estos últimos aparecen efectivamente como mediadores o vectores de difusión. La entrada en el gobierno municipal de Ahora Madrid en 2015, es la materialización final de esta dimensión.

Conclusiones

Las relaciones de poder entre las autoridades públicas —ya sean municipales, regionales o estatales— y el movimiento okupa, han seguido el patrón de dependencia (*path dependence*) descrito por Mahoney (2007). Este modelo de relación entre autoridades y movimientos sociales, se abrió en España durante la transición y se traduce en un enfrentamiento entre actores

públicos, que se oponen a toda forma de movimiento autogestionado y alternativo, y activistas, que ven toda forma de negociación como una traición a la lucha.

Para los tres casos (con excepciones en Barcelona y Madrid, a partir de 2015), la situación es típica de un “diálogo de sordos” entre un movimiento okupa bastante radical (que rechaza generalmente las formas de legalización denunciando los procesos de cooptación) y una esfera de las élites políticas que no toma en cuenta las reivindicaciones de la sociedad civil. La confrontación es violenta; no solo simbólicamente (en los discursos), sino también físicamente durante manifestaciones y desalojos. Esto da lugar a una escalada creciente de radicalización. La gobernanza suele quedar cerrada, excepto en algunas excepciones que, paradójicamente, pueden legitimar a la inversa este marco represivo (Debelle *et al.*, 2018).

Sin embargo, este artículo muestra diversas formas de negociación en los últimos 34 años. Son casos raros de legalización, formalización y difusión de iniciativas desde los CSOA hacia las esferas institucionales que han abierto mesas de negociación y relaciones estables que permiten encuentros y colaboración entre el mundo okupa y el institucional y, en algunos casos, han permitido la consolidación de ciertos proyectos sociales, políticos y culturales garantizando su durabilidad. Se han construido estructuras híbridas de

trabajo, que se convirtieron en bases de innovación social, cultural y política. Sobre esta efervescencia, las élites políticas, sus gabinetes políticos y los técnicos del sector público han desarrollado e implementado nuevas formas de políticas públicas más participativas, intersectoriales, flexibles, pero también más temporales y con menos presupuesto. En efecto, este artículo muestra cómo las autoridades locales delegan con más frecuencia la implementación de servicios públicos a los colectivos autónomos que funcionan sin dinero.

A escala metropolitana, el movimiento okupa funciona como una plataforma donde los activistas producen alternativas que son, a veces —durante crisis que abren ventanas de oportunidad—, cooptadas por el poder político institucional contra el cual los activistas más radicales siguen luchando (Pruijt, & Roggeband, 2014). Para entender los efectos de los movimientos sociales, se deben investigar también las relaciones entre los diferentes grupos que constituyen redes heterogéneas con objetivos múltiples y no tanto organizaciones coherentes con un programa único (Tilly, 1999).

El 15-M jugó un papel de catalizador de estas lógicas subyacentes. La legitimación de una cierta desobediencia civil por y para la vivienda, particularmente destacada por la PAH en Barcelona y Madrid, reforzó las dinámicas de conflicto. Por un lado, el movimiento okupa se beneficia ahora

de un apoyo popular más amplio y ganó activistas a través de las asambleas de barrio y de las oficinas de okupación.¹⁰ Por otro lado, las esferas políticas de las instituciones se abrieron a personas cercanas al movimiento okupa y a la sociedad civil, especialmente en Barcelona y Madrid. Las elecciones municipales y regionales de 2015 ilustraron esta dinámica de transferencia de experiencias y de cooptación, sobre todo en Barcelona, donde la actual alcaldesa es exportavoz de la PAH y exactivista de históricos CSOA como Magdalenes o Miles de Viviendas.

Por su parte, el caso de Bilbao nos muestra cómo la falta de alternancia política y el continuismo en las formas e identidades del propio movimiento han supuesto un estancamiento y un menor impacto del movimiento de okupación, ya no solo en las esferas institucionales, sino en los nuevos movimientos emergentes en el contexto de la crisis.

Este artículo confirma que el conflicto entre grupos sociales e instituciones públicas juega un papel central en la innovación de las políticas públicas (García, 2008). Las experimentaciones que ocurren a nivel local y en grupos autónomos, pueden circular para provocar reconfiguraciones importantes de formas de ciudadanía (Membretti, 2007) y —en ciertas

¹⁰ Algunos centros sociales proponen clases de formación para okupar el propio departamento. En Madrid, el CSOA Casablanca fue una plataforma particularmente activa en este sentido.

condiciones— para impactar en la esfera de toma de decisión. La gobernanza urbana puede ser afectada de manera bastante durable (Degen, & García, 2012). Además, la ilegalidad de la okupación de locales para establecer viviendas o centros sociales provoca rupturas fuertes en los órdenes políticos, cuyos defensores deben reconocer, de manera más o menos explícita, el carácter dinámico e innovador de las “inteligencias colectivas” (Katsiaficas, 2006) que se desarrollan de manera autónoma en las asambleas y entre los muros de las okupaciones.

Referencias

- Aguilera, T. (2012). Gouverner les illégalismes. Les politiques urbaines face aux squats à Paris. *Gouvernement et action publique*, 3, 101-124.
- (2013). Configurations of Squats in Paris and the Ile-de-France Region: Diversity of Goals and Resources. In Squatting Europe Kollektive (SqEK) (Ed.), *Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles* (pp. 209-230). Wivenhoe/New York/Port Watson: Minor Compositions.
- (2018). The Squatting Movement(s) in Paris: Internal Divides and Conditions for Survival. In M. A. Martínez López (Ed.), *The Urban Politics of Squatters' Movements* (pp. 121-144). New York: Palgrave Macmillan.
- Aguilera, T. & Bouillon, F. (2013). Le squat, un droit à la ville en actes. *Mouvements*, 74(2), 132-142.
- Alcalde, J. (2004). La batalla de los medios: la definición de la problemática okupa en los medios de comunicación de masas. En R. Adell & M. A. Martínez (Coords.), *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales* (pp. 227-266). Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Amenta, E. (2006). *When Movements Matter. The Townsend Plan & the Rise of Social Security*. Princeton: Princeton University Press.
- Andrews, K. T. (2001). Social Movements and Policy Implementation: The Mississippi Civil Rights Movement and the War on Poverty, 1965 to 1971. *American Sociological Review*, 66(1), 71-95.
- Araiza, A., & González, R. (2017). La investigación activista feminista. Un diálogo metodológico con los movimientos sociales. *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 38, 63-84.
- Asens, J. (2004). La represión al movimiento de las okupaciones: del aparato policial a los *mass media*. En R. Adell, & M. A. Martínez (Coords.), *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales* (pp. 293-338). Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Barranco, O., González, R., & Llobet, M. (2016). Del movimiento okupa a las PAH: cambios en las visiones e interpretaciones de la ocupación de viviendas. XII Con-

- greso Español de Sociología. Gijón, España.
- Barranco, O., González, R., & Martí, M. (2003). Premisa, política i el moviment per l'okupació. IV Congrés Català de Sociologia. Reus: Associació Catalana de Sociologia.
- Bennet, A., & Elman, C. (2006). Qualitative Research: Recent Developments in Case Study Methods, *Annual Review of Political Science*, 9(1), 455-476.
- Bouillon, F. (2009). *Les mondes du squat*. Paris: Le Monde.
- Breviglieri, M. (2013). Une brèche critique dans la "ville garantie"? Espaces intercalaires et architectures d'usage. In E. Cogato-Lanza, L. Pattaroni, M. Piraud, & B. Tirone, *De la différence urbaine: le quartier des Grottes/Genève* (pp. 213-236). Genève: Métis Press.
- Casellas, A., & Sala, E. (2017). Home Eviction, Grassroots Organisations and Citizen Empowerment in Spain. In K. Brickell, M. Fernández, & A. Vasudevan (Eds.), *Geographies of Forced Eviction: Dispossession, Violence, Resistance* (pp. 167-190). New York: Palgrave Macmillan.
- Castells, M. (1983). *The City and the Grassroots. A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements*. Berkeley: University of California.
- Cattaneo, C. (2008). The Ecological Economics of Urban Squatters in Barcelona. Ph.D. Thesis UAB Barcelona. Retrieved from <https://sqek.squat.net/resources/>
- Cattaneo, C., & Galvadà, M. (2008). Autoproducción y autonomía energética: el caso del Centro Social Okupado Kan Pasqual (KP). *Ecología Política*, 35. Recuperado de <http://www.ecologiapolitica.info/?product=35-sustainable-degrowth>
- Cattaneo, C. & Martínez, M. A. (2014). Introduction: Squatting as an Alternative to Capitalism. In SqEK, C. Cattaneo, & M. A. Martínez, *The Squatters' Movement in Europe. Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism* (pp. 1-25). London: PlutoPress.
- Cogato Lanza, E., Pattaroni, L., Piraud, M. & Tirone, B. (2013). *De la différence urbaine. Le quartier des Grottes/Genève*. Genève: Metispresse.
- Dahl, R. A. (1956). *A Preface to Democratic Theory*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Debelle, G. (2010). Anàlisi crítica del discurs de textos periodístics de la premsa comarcal catalana sobre l'okupació, Treball de recerca, Facultat de Ciències de la Comunicació, UAB.
- Debelle, G., Cattaneo, C., González, R., Barranco, O. & Llobet, M. (2018). Squatting Cycles in Barcelona: Identities, Repression and the Controversy of Institutionalisation. In Martínez, M. A. (Coord.), *The Urban Politics of Squatters' Movements* (pp. 51-73). New York: Palgrave Macmillan.
- Dee, E. T. (2014). The Ebb and Flow of Resistance: Analysis of the Squatters' Movement and Squatted Social Centres in Brigh-

- ton. *Sociological Research Online*, 19 (4), 6
<http://www.socresonline.org.uk/19/4/6.html> DOI: 10.5153/sro.3502.
- Degen, M., & García, M. (2012). The Transformation of the “Barcelona Model”: An Analysis of Culture, Urban Regeneration and Governance. *International Journal of Urban and Regional Research*.
- De Miguel, J. (2018). Can Masdeu, de l’ocupació al projecte de vida. *Crític*. Recuperado el 7 de enero de 2019, de <https://www.elcritic.cat/blogs/sostrecritic/2018/05/29/can-masdeu-de-locupacio-al-projecte-de-vida/>
- Equip d’Anàlisi Política (EAP) de la UAB & Universitat Del País Basc (2002). *Xarxes crítiques a Catalunya i Euskadi: antimilitarisme i okupació*. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
- Estebaranz, J. (2005). *Tropikales y Radikales: experiencias alternativas y luchas autónomas en Euskal Herriak (1985-1990)*. Bilbao: Likiniano Altxorra.
- Foronda, Ch. (2017). La familia Güell recura la casa okupa de la Muntanya, *La Vanguardia*.
- Gamson, W. A. (1975). *The Strategy of Social Protest*. Homewood Illinois: Dorsey Press.
- García, M. (2008). Barcelona: ciudadanos y visitantes. En M. Degen, & M. García (Eds.), *La metaciudad: Barcelona. Transformación de una metrópolis*. Barcelona: Antrhopos.
- Giugni, M. (2004). *Social Protest and Policy Change: Ecology, Antinuclear and Peace Movements in Comparative Perspective*. Lanham: Rowan & Littlefield.
- González, R. (2004). La okupación y las políticas públicas: negociación, legalización y gestión local del conflicto urbano. En Adell R. & Martínez M.A. (dirs.), *¿Dónde están las llaves? Prácticas y contextos sociales del movimiento okupa* (pp.151-178). Madrid: La Catarata.
- González, R. (2008). Okupació i autogestió: una pràctica política juvenil? *Nous Horitzons*, 189 pp. 51-59.
- (2011). Xarxes crítiques i polítiques públiques: els impactes del moviment per l’okupació a Catalunya i Madrid (1984-2011), Tesis Doctoral, Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB.
- (2015). El moviment per l’okupació i el moviment per l’habitatge: semblances, diferències i confluències en temps de crisi, *Recerca, Revista de Pensament i Anàlisi*, 17 pp. 85-106. doi: <http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2015.17.5>
- (2018). *Movimientos sociales y políticas públicas: los impactos de los centros sociales okupados en Cataluña y Madrid (1984-2014)*. Pachuca de Soto: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- González, R., & Araiza, A. (2016). Feminismo y okupación en España. El caso de la Eskalera Karakola, *Sociológica*, 31 (87), 207-236.
- González, R., Blas, A. & Peláez Ll. (2002). Okupar, resistir y generar autonomía. Los impactos políticos del movimiento por

- la okupación. En P. Ibarra, S. Martí, & R. Gomà (Coords.), *Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas* (pp. 187-218). Barcelona: Icaria.
- González, R., Martínez, M. A., & Barranco, O. (2018). Autogestión de equipamientos y espacios urbanos: los centros sociales okupados y autogestionados. En Martí, S., González, R., Gomà, R., y Ibarra, P., (Eds.). *Movimientos sociales y derecho a la ciudad. Creadores de democracia radical* (pp. 88-102). Barcelona: Icaria.
- Gutiérrez, A., Delclòs, X. (2016). The Uneven Distribution of Evictions as New Evidence of Urban Inequality: a Spatial Analysis Approach in Two Catalan Cities. *Cities*, 56, 101-108.
- Herreros, T. (2004). Moviments socials i cicles de protesta: el cicle de protesta del capitalisme global, 1994-2003. Ponència al VIII Congreso Español de Sociología. Alacant: FES.
- Katsiaficas, G. (1997). *European Autonomous Social Movement and the Decolonization of Everyday Life*. Atlantic Highlands: Humanities Press International.
- Kitschelt, H. (1986). Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-nuclear Movements in Four Democracies, *British Journal of Political Science*, 16, 55-85.
- Kriesi, H. (1995). *New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kukutza Gaztetzeko Kideak & Egia, L. (2011). *Kukutza Gaztetzexa: ellos por dinero, nosotros por placer*. Tafalla: Txalaparta.
- Larrea, A., & Gamarra, G. (2007). *Bilbao y su Doble: ¿regeneración urbana o destrucción de la vida pública?* Bilbao: Gatazka Gunea.
- Lipsky, M. (1970). *Protest in City Politics Rent Strikes, Housing and the Power of the Poor*. Chicago: Rand McNally
- López, I. & Rodríguez, E. (2013). *Paisajes devastados. Después del ciclo inmobiliario: impactos regionales y urbanos de la crisis*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Likiniano Elkartea y Donostialdeko Okupazio Batzarra (Coords.) (2001). *Vivienda: Especulación,...eOkupazioak*. Bilbao: Likiniano Altxorra.
- Mahoney, J. (2007). Debating the State of Comparing Politics. Views Form Qualitative Research, *Comparative Political Studies*, 40 (1). 32-38.
- Martínez, M. A., & García, A. (2012). The Occupation of Squares and the Squatting of Buildings: Lessons From the Convergence of Two Social Movements. Retrieved from http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/articulo_Bilbao_v4_book_doc.pdf
- (2004). Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de okupación en España. En R. Adell, & M. A. Martínez (Coords.), *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales* (pp. 61-88). Madrid: Los Libros de la Catarata.

- (2007). El movimiento de okupaciones: contracultura urbana y dinámicas alter-globalización. *Revista de Estudios de Juventud*, 76, 225-243.
- (2010). Los procesos de institucionalización en el movimiento de okupaciones. Estrategias, discursos y experiencias. En M. Domínguez, M. Martínez & E. Lorenzi. *Okupaciones en Movimiento. Derivas, estrategias y prácticas* (pp. 53-132). Madrid: Tierra de Nadie Ediciones.
- (2018). Bitter Wins or a Long-distance Race? Social and Political Outcomes of the Spanish Housing Movement. *Housing Studies*.
- McAdam, D., & Snow, D. A. (2010). *Readings on social movements : origins, dynamics and outcomes* (2nd ed). New York: Oxford University Press.
- McCarthy, J., & Zald, M. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82 (6), 1212-1241.
- Membretti, A. (2007). Centro Sociale Leoncavallo. *Urban and Regional Studies*, 14 (3), 252-263.
- Miro, I. (2008). Dibujando nuevas, rápidas figuras. En P. Ibarra, & E. Grau (Coord.). *La red en la ciudad*, Barcelona: Icaria.
- Mudu, P. (2013). Resisting and Challenging Neoliberalism. In SQEK (Ed.), *Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles* (pp. 61-88). Wivenhoe/New York/Port Watson: Minor Compositions.
- Owens, L. (2016) Amsterdam Squatters on the Road: A Case Study in Territorial and Relational Urban Politics. In Andresen K. & Van der Steen, B. (Eds.), *A European Youth Revolt*. (pp. 53-66). London: Palgrave Macmillan.
- Padrones, S. (2017). El movimiento de okupación como proceso emancipador. El caso de Donostialdea. Tesis doctoral, Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Miguel Hernandez de Elche.
- Péchu, C. (2010). *Les squats*. Paris: Presses de Sciences Po.
- Piazza, G. (2012). Come decidono gli attivisti all'interno dei Centri Sociali? Uno studio comparato delle occupazioni in una città italiana. *Partecipazione e Conflitto*, 1, 118-140.
- Piven, F. F., & Cloward, R. (1979). *Poor People's Movements: Why They Succeed, How They Fail*. New York: Vintage Books.
- Pruijt, H. (2003). Is the Institutionalization of Urban Movements Inevitable? A Comparison of the Opportunities for Sustained Squatting in New York City and Amsterdam. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27, 133-157.
- (2004). Okupar en Europa. En R. Adell, M. A. Martínez (Coords.), *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales* (pp. 35-60). Madrid: Los Libros de La Catarata.
- (2013). Squatting in Europe. SQEK (Ed.), *Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles* (pp.17-60). Wivenhoe/New York/Port Watson: Minor Compositions.

- Pruijt, H., & Roggeband, C. (2014). Autonomous and/or Institutionalized Social Movements? Conceptual Clarification and Illustrative Cases. *International Journal of Comparative Sociology*.
- Ragin, C. C. (1997). Turning the Tables: How Case-oriented Research Challenges Variable-oriented Research, *Comparative Social Research*, 16, 27-42.
- Rodríguez, P. (2018). Ada Colau quiere convertir la emblemática “okupa” Kasa de la Muntanya en vivienda social. *Diario.es*. Recuperado el 10 de enero de 2019, de https://www.eldiario.es/catalunya/Ada-Colau-emblematica-Kasa-Muntanya_0_838516192.
- Santoro, W. A. y McGuire, G. (1997). Social Movement Insiders: The Impact of Institutional Activists on Affirmative Action and Comparable Worth Policies, *Social Problems*, 44 (4), 503-519.
- Suh, D. (2011). Institutionalizing Social Movements: The Dual Strategy of the Korean Women's Movement. *The Sociological Quarterly*, 52 (3), 442-471.
- Skocpol, T. (2003). Diminished Democracy: From Membership to Management in American Civic Life. *Public Interest*, 153, pp. 100-104.
- Solé, I., & Biescas, A. (2018). Can Masdeu. Viure a la ciutat des dels marges. *Vilaweb*. Recuperado el 8 de enero de 2019, de <https://www.vilaweb.cat/noticies/viure-a-la-ciutat-des-dels-marges/>
- Tarín, S. (2018). El templo okupa de Barcelona se convertirá en vivienda social. *La Vanguardia*, 28/11/2018.
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (1995). Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention. In Traugott (Ed.), *Repertoires and Cycles of Collective Action* (pp. 89-116). Durham: Duke University Press.
- Tilly, C. (1999). From Interactions to Outcomes in Social Movements. In M. Giugni, D. McAdam, & C. Tilly (Eds.), *How social movements matter* (pp. 253-270). Minneapolis/London: University of Minnesota Press.
- Tilly, C., McAdam, D., & Tarrow, S. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.